

Consideraciones sobre las tensiones en la intermediación política del movimiento cocalero en el Perú

Nicolás ZEVALLOS* y Jaris MUJICA**

* Doctorando en Ciencia Política, magíster en Ciencia Política y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigador principal del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia – CISEPA PUCP. Correo-e: nzevallos@pucp.pe

** Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato a doctor en Ciencia Política, magíster en Ciencia Política y licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigador principal del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia – CISEPA PUCP. Correo-e: jmujica@pucp.edu.pe

Consideraciones sobre las tensiones en la intermediación política del movimiento cocalero en el Perú

RESUMEN

En Perú, el movimiento cocalero surgió como una respuesta a la postura del Estado en contra de la proliferación de cultivos ilícitos de hoja de coca. Para defender este producto, ha recurrido principalmente a tres tipos de organizaciones para la intermediación política: los grupos de presión a través del gremio cocalero, partidos políticos y los grupos insurgentes. Este artículo muestra que, en el ejercicio de esta intermediación, estos tres actores despliegan discursos y prácticas muchas veces contradictorias, forjando la estructura coyuntural y permeable del movimiento, de acuerdo con el ámbito político en el que el movimiento requiere desplazarse para defender el cultivo de la hoja de coca.

Palabras clave: movimientos sociales, organizaciones políticas, cultivos ilícitos, políticas antidrogas, Perú, hoja de coca.

Considerations about the tensions within the political intermediation of Coca Leaf Producers Movement in Peru

ABSTRACT

In Peru, the coca growers' movement emerged as a response to the State stance against the proliferation of illicit cultivation of coca leaf. To defend this product, this social movement has appealed mainly to three kinds of actors: pressure groups, political parties and insurgent groups. This article points that, in the exercise of this intermediation, these three actors deploy contradictory discourses and practices, according to the political arenas in which the movement requires navigate to defend the cultivation of the coca leaf.

Keywords: social movements, political organizations, illicit crops, antidrugs policies, Peru, coca leaf.

La racionalidad de las políticas públicas es una de las formas posibles para dar cuenta del significado de un problema público y para establecer las relaciones para resolverlo, mas no es la única (Arellano, 1996, p. 333). En los espacios locales y en el seno de la formación de colectividades existen otras maneras de abordar los problemas, que no necesariamente buscan la eficiencia y maximización de los recursos, a diferencia de la mirada impresa en la estructura formal de las políticas públicas (Segura, 2009). Esa tensión de aproximaciones implica que actores con racionalidades diferentes a la estatal se movilicen (O'Donnell y Ozlak, 1981, pp. 115-116), y evidencien los rasgos de escenarios políticos heterogéneos respecto a intereses y objetivos (Medellín, 1997). Entre las diversas formas en que se disponen las tensiones respecto al Estado se encuentran los *movimientos sociales*. El comportamiento de estos actores tiende a modificar el panorama de las relaciones sociales, afectando el universo y la jerarquización de los problemas públicos (O'Donnell y Ozlak, 1981, p. 110).

Un movimiento social está constituido por redes de grupos e individuos que comparten una «identidad colectiva» y cuyo objetivo es tratar de «prevenir, alcanzar o resistir un cambio social» (Kolb, 2000, p. 19). Para algunos la existencia de un movimiento social requiere i) un sentido de solidaridad fuertemente enraizado, ii) identidad colectiva y iii) oportunidad política (Tarrow, citado por Van Dun, 2009, p. 214). Desde la mirada de los *nuevos movimientos sociales* (Touraine, 1999), para que un movimiento social exista y subsista se requiere una oposición al orden imperante desde una serie de valores esenciales para un conjunto de la sociedad (Meyer, 2004, p. 134). Así, un movimiento social devendría en un conjunto de redes de grupos e individuos caracterizados por su sentido de solidaridad e identidad colectiva, que se movilizan en tensión a la institucionalidad de una postura estatal ante un problema público, por considerar que representa un orden imperante diferente a sus valores (u objetivos).

Existe una relación bidireccional entre las políticas públicas y los movimientos sociales (Özen y Özen, 2010, p. 36). Junto a que la toma de postura del Estado puede generar movilización social, esta última puede influenciar en los contenidos de las políticas públicas. De esta manera, si un movimiento social se siente efectiva o potencialmente afectado por determinada política, puede apostar por movilizarse a fin de resistir el impacto negativo o promover un impacto positivo de la misma. Esta movilización sienta sus bases en la existencia de racionalidades distintas para abordar un mismo problema público: una forma estatal, marcada por la necesidad de efectividad en el cumplimiento de metas burocráticas y administrativas, acotada por la disponibilidad de recursos públicos y otra forma que responde a la proliferación del descontento ante el orden imperante que representa la toma de posición del Estado (Jenkins y Perrow, 1977, p. 250).

La racionalidad que el Estado plasma en su institucionalidad no es solo cuestionada en el fondo, sino también en términos de la forma en que se encuentra estructurada (Kolb, 2000, p. 19). Así, los movimientos sociales —y en este caso el movimiento cocalero en el Perú— representan retos organizados que usan un amplio rango de tácticas y estrategias dentro o fuera de la política formal, a fin de lograr sus propios objetivos, por lo que pueden apelar a tácticas que pueden ser o no legales o institucionalizadas (Meyer, 2003, p. 30). ¿Qué es lo *relevante*? Esta movilización social generada en tensión a una postura estatal *puede oscilar entre la legalidad y la ilegalidad*, a fin de defender valores e intereses. *Lo particular en ello es que se llegue a recurrir a estas estrategias de manera simultánea, aun cuando en determinados escenarios pueda resultar contradictorio* (Arellano, 1996, p. 326).

Para concretar tales estrategias, los movimientos sociales *recurren a las organizaciones y actores que los integran*, en tanto se trata de organizaciones operativamente diferenciadas del movimiento (Tilly, 1993). Así, si bien los movimientos sociales se reconocen como estructuras de *intermediación*, no siempre tienen por sí mismos el poder suficiente para participar formal e informalmente en, por ejemplo, los procesos de estructuración de políticas públicas (Özen y Özen, 2010, p. 33). Así, en ciertos casos el movimiento social no existe por sí mismo sino por medio de las redes de organizaciones que lo componen (y que las intermedian ante otras arenas). Si bien puede resultar común señalar que un movimiento social se moviliza a favor o en contra de alguna medida que afecte sus intereses, tal movilización se hace operativamente efectiva a través de alguna organización, por ejemplo, un gremio o alguna organización social de base.

En ese horizonte debe considerarse que la participación en las arenas políticas donde se discute tanto la postura estatal como su traducción en políticas públicas, es restrictiva, encontrándose abierta solo para que determinadas organizaciones logren integrarse en el sistema de presión que influye en la formulación de políticas. Así, cada arena política está marcada por reglas y recursos que canalizan determinado tipo de acciones (Jasper, 2002, p. 5). Cada arena habrá de asimilar tipos de acción diferenciada, dando cabida a su vez a formas de organización diferentes. Estas organizaciones abordarán los problemas de acuerdo a los criterios específicos de su campo de acción (Lorenc, 2005). Por ello, el movimiento social *requiere construir alianzas políticas (formales o no) con organizaciones capaces de moverse ya sea dentro o fuera del margen legal e institucional (intermediación)*, a fin de que sus reclamos se hagan visibles con algo de éxito (Giugni y Passy, 1998). Ocurre así que, cuando las arenas legales no tengan capacidad de resolver los conflictos en torno a una política, se generarán alternativas extrainstitucionales y extralegales (Medellín, 1997).

Por lo tanto, para el caso del movimiento cocalero, se propone comprender la *intermediación* desde tres tipos de organizaciones, encontrando que cada una de estas

responde a una arena política particular. Cuando se trate de la *intermediación* de los intereses del movimiento social en la arena de la representación política en la toma de decisiones, serán los partidos políticos quienes deban asimilar sus propuestas, por ejemplo, en sus plataformas electorales. Cuando se trate de generar presión pública, arena menos institucionalizada que la anterior, serán las organizaciones gremiales en tanto grupos de presión quienes asuman estos intereses en sus acciones de protesta. En los extremos en los que el movimiento social sea intermediado por grupos insurgentes en el margen de arenas extralegales, el direccionamiento de sus actos violentistas estará relacionado con los intereses del colectivo. Este último tipo de intermediación extralegal y extrainstitucional ocurre aun cuando el recurso de la violencia es uno de los principales peligros que amenazan la formación de los nuevos movimientos sociales (Touraine, 1999). El movimiento social puede recurrir simultánea o alternativamente a estas diferentes arenas, requiriendo la *intermediación* de diferentes organizaciones, de acuerdo a la conveniencia de los resultados que logre conseguir en cada una de estas (Jasper, 2002, p. 5).

Este artículo explora la manera en que se expresan aquellas tensiones en el ejercicio de la *intermediación política* para la defensa del cultivo de hoja de coca durante la primera década de este siglo, y a partir de tres actores (que no son los únicos, pero sí los más evidentes). Se parte de la premisa que, de acuerdo a la arena en la que el movimiento cocalero (como estructura con núcleos claros, pero bordes difusos) requiera desplegarse, habrá de recurrir a una organización con objetivos particulares, que puede llegar a perseguir objetivos diferentes a los de las otras organizaciones que también interceden por el movimiento.

Para ello, se ha recolectado información en dos de las principales zonas de producción cocalera, donde tiene lugar esta intermediación: el Alto Huallaga, en la zona nororiental del Perú y en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), en la zona centro sur del país¹. Cabe precisar que el objetivo de este recojo no tiene principalmente un propósito comparativo, siguiéndose como criterio para la selección de estas zonas la disponibilidad de información dado el importante desarrollo que ha tenido el movimiento cocalero en estos tres territorios. Para realizar el análisis, se ha recurrido a un enfoque cualitativo del fenómeno, de manera que junto a la revisión documental y de bases de datos, se han aplicado entrevistas a actores clave (especialistas, agricultores cocaleros y excocaleros, técnicos responsables de proyectos de control de cultivos), así como observaciones de campo no sistemáticas.

¹ La información de terreno ha sido recogida por Nicolás Zevallos y su equipo de campo entre 2010 y 2012, y procesada por el equipo del Laboratorio de Criminología Social entre 2012 y 2013.

1. Las organizaciones intermediarias y su relación con la formación del movimiento cocalero en el Perú

La toma de posición del Estado frente a la proliferación de los cultivos de hoja de coca ha sido crucial en la emergencia del movimiento cocalero en el Perú y ha generado espacios de coalición que producen identidades por oposición a las políticas estatales (Meyer, 2004, p. 140). En esta línea, el «movimiento cocalero» puede comprenderse como un «movimiento social» que organiza esfuerzos para oponerse a políticas que, desde su perspectiva, corresponden a estructuras sociales y económicas opresivas (Petras y Veltmeyer, 2006, p. 33). Ese movimiento surge no solo por la política específica, sino por la proliferación del descontento que se genera en un sector de la población debido a que implica un cambio percibido de manera negativa para su forma de vida (Jenkins y Perrow, 1977, p. 250). Si bien existen diversos detonantes para la *movilización*, su estructura como movimiento responde a la toma de posición del Estado sobre los medios a los que recurren para su subsistencia.

Estos elementos permiten entender por qué el movimiento cocalero emerge en zonas donde la proliferación de este cultivo formó parte neurálgica de la formación de la comunidad². La erradicación forzada ha sido desde un inicio, y especialmente luego del conflicto armado interno, el principal motivo por el que se organizaban las movilizaciones. Sin embargo, este ha sido solo un primer incentivo para la movilización, ya que posteriormente el movimiento integró nuevas demandas y logró que la identidad cocalera se forme en torno a un sentido de exclusión (Van Dun, 2009, pp. 191-197). Estas propuestas han variado con los años, aceptándose incluso la reducción gradual y concertada de las áreas cultivadas o solicitándose la ampliación de los programas de desarrollo alternativo (Bebbington et al., 2008).

² En el Alto Huallaga, la hoja de coca no ha sido simplemente un producto agrícola, sino la protagonista y dinamizadora de un proyecto histórico de colonización del territorio nororiental. El *boom* de la coca entre 1970 y 1990 significó un importante cambio de rumbo para el valle del Alto Huallaga. Tan solo en el departamento de Huánuco la coca pasó de ocupar 2460 ha en 1972 a 28 800 ha en 1985 (Van Dun 2009, p. 90). Para 1990, los cultivos llegaron a 210 000 ha a nivel nacional (UNODC, 2010). Este crecimiento respondía al asentamiento de traficantes internacionales, que luego dieron espacio a traficantes peruanos. Con este crecimiento, también cambió la forma en que se distribuía el cultivo, pues si para fines de la década de 1970 el 54% se encontraba en el Cusco y el 24% en Huánuco, para inicios de la década de 1980, la participación del Cusco cayó a 13%, concentrándose el 36% en Huánuco y el 45% en San Martín (CVR, 2003). Desde 1991 la extensión de cultivos empezó a reducirse, pero es a partir de 1995 que, con el corte del puente aéreo entre Perú y Colombia y la consecuente caída de los precios de la hoja de coca, la extensión de los cultivos se redujo hasta llegar a 38 000 en 1999, el punto más bajo de los últimos treinta años. Desde el año 2000, los cultivos han vuelto a crecer nuevamente, hasta alcanzar las 62 500 ha en 2011 (UNODC, 2012).

Con el tiempo, el movimiento cocalero ha desarrollado ciertas características (Bebbington et al., 2008). En primer lugar, es poco común encontrar que el movimiento cocalero articule agendas nucleares con otros movimientos sociales pues, aun cuando pueda vincularse al movimiento agrario o llegue a integrar propuestas semejantes, sus organizaciones suelen ser independientes y mantener una dinámica propia. Esto está vinculado a un segundo elemento, dado que se trata de la defensa de un producto ilícito, llevando a que otras instancias de la sociedad civil marquen relativa distancia. En tercer lugar, se trata de un movimiento capaz de tomar medidas radicales, aun cuando dicha perspectiva no tenga necesariamente una proyección ideológica determinada. En cierta medida, estas características no solo han mermado en algún momento la identificación del movimiento cocalero, sino que han permeado otro elemento: la relación con *organizaciones intermediarias* (Tilly, 1993).

Los movimientos sociales tienden a estar envueltos en un campo multiorganizacional, definido por las organizaciones con las que el movimiento puede establecer vínculos específicos (intermediaciones). Estas organizaciones brindan al movimiento una serie de recursos que le permite proyectar sus intereses en diferentes arenas (Klandersman, citado por Kolb, 2000, p. 35). Desde su surgimiento hasta la actualidad, el movimiento cocalero ha logrado constituir relaciones sustancialmente con tres tipos de organizaciones que le han permitido intervenir de diferente manera en el espacio público: las organizaciones gremiales, los partidos políticos y, en el extremo más violento, los grupos insurgentes. Para el caso concreto, las organizaciones gremiales le han permitido al movimiento cocalero contar con interlocutores para ejercer presión pública, principalmente ante el gobierno central (Bebbington et al., 2008). Los partidos políticos han permitido que sus principales dirigentes intenten suerte en procesos electorales locales, regionales y nacionales con relativo éxito, a fin de insertarse en la conducción del Estado a diversos niveles. Finalmente, Sendero Luminoso como grupo insurgente, tanto en el Alto Huallaga como en el VRAE, ha servido como fuerza armada para resistir (tanto simbólica como militarmente) a los operativos de erradicación forzosa.

2. La construcción de espacios de relación del movimiento cocalero con las organizaciones intermediarias

El tránsito del movimiento cocalero da cuenta de los espacios donde se ha ido construyendo progresivamente la intermediación con las tres organizaciones políticas estudiadas. En la génesis del movimiento se encuentran los gremios. Si bien desde la década de 1950 existían ya organizaciones de productores cocaleros (como la Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares

—FEPCACYL— fundada en 1950), la primera referencia de resistencia a la política estatal frente a los cultivos de hoja de coca data de 1964, cuando se crea el Comité de Productores de Coca de Tingo María, frente a la promulgación del decreto supremo 245, que delimitaba las zonas autorizadas para la producción autorizada y determinaba plazos para que los agricultores transiten hacia otros cultivos alternativos a la hoja de coca.

En 1978, con la promulgación de la ley 22095 de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, se declaraba la guerra al cultivo ilegal. En ese marco, entre fines de 1979 e inicios de 1980, tuvieron lugar los dos primeros grandes operativos de erradicación Mar Verde I y Mar Verde II, siendo la primera vez que más de 1500 sinchis, efectivos de la Marina y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ocuparon Tingo María. Como respuesta a estas acciones, surgió el Comité Regional de Productores de Coca de la provincia de Leoncio Prado, quienes desarrollaron los primeros grandes paros entre 1979 y 1982 (CVR, 2003).

Han sido varias las organizaciones gremiales que han asumido el protagonismo público en nombre del movimiento cocalero (CVR, 2003), y son diversas las razones que han hecho difícil articular de manera sostenida una organización nacional que les permita dialogar con el gobierno central. En primer lugar, algunos gremios estaban más preocupados por la defensa local de sus intereses: por ejemplo, FEPCACYL, ubicado en La Convención y Lares en el Cusco, al integrar a agricultores lícitos son resistentes a coordinar con otras agremiaciones que consideran vinculadas al narcotráfico, por lo que prefieren concentrar su atención en su interacción con la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) (Durand, 2005, p. 119).

Si bien en algún momento la Central Nacional de Cocaleros del Perú (CENACOP) intentó articular nacionalmente a los gremios de productores, fue recién en el 2003 que la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) logró integrar los intereses de la mayor parte de los agricultores organizados de las zonas productivas. La CONPACCP constituyó una organización paraguas que se vio fortalecida por el recrudescimiento de la erradicación (Van Dun, 2009, p. 205). Sin embargo, no estuvo libre de dificultades desde su creación debido a la poca organización de sus bases locales, pero principalmente por las diferencias regionales y culturales de sus integrantes, así como por el protagonismo de sus líderes nacionales.

Parte de las dificultades asociadas al protagonismo de sus líderes nacionales se enmarca en el relacionamiento con partidos políticos, siendo estos, sin embargo, los que tienen una aparición más tardía en la evolución del movimiento social. Así como se tejieron relaciones con organizaciones gremiales, los partidos políticos también han jugado un rol importante, entendiendo que si un movimiento

social puede ganar acceso institucional al proceso de políticas, tiene mayor oportunidad para lograr un cambio en las mismas (Kolb, 2000, p. 65). Los partidos políticos ofrecen la posibilidad de participar de las decisiones del gobierno (Burstein y Linton, 2002, p. 385) y, para lograr el acceso institucional, el movimiento cocalero optó por varios caminos (ante la ausencia de un partido cocalero). Por ejemplo, los principales dirigentes de la CONPACCP, al ver que, a pesar de sus movilizaciones, no lograban frenar la implementación de las estrategias de control de cultivos, especialmente de la erradicación, optaron por la participación partidaria (Van Dun, 2009, p. 286).

Algunos dirigentes buscaron insertarse en la política nacional, a través de candidaturas al Legislativo. Los cocaleros del Alto Huallaga establecieron alianzas con el Partido Nacionalista del Perú liderado por el candidato Ollanta Humala, quien llevó en su lista parlamentaria a las dirigentas Elsa Malpartida y Nancy Obregón en el período 2006-2011. El objetivo de estas era, desde el Parlamento, «acabar con las acciones de erradicación». Ahora, si bien lograron ser elegidas representantes, no pudieron contar con el apoyo de su bancada para llevar adelante una reforma legislativa que les permitiera frenar las acciones de control e interdicción (Bebbington et al., 2008). Otros dirigentes apuntaron a copar los espacios locales, aprovechando el soporte del movimiento, a fin de promover desde ahí la protección de los cultivos de hoja de coca. Es así que Nelson Palomino (dirigente cocalero del VRAE) fundó en Pichari el partido Kuska Perú, que sirvió de plataforma para sumar a varios dirigentes del VRAE en movimientos regionales de cara a las elecciones municipales y regionales (Van Dun, 2009) Esas dos opciones no mostraron los logros esperados, generaron desconfianza en la población y significaron un quiebre interno en la ya complicada organización de la CONPACCP.

Se organizaron porque ellos pensaban llegar a la Presidencia de la República, pero iban probando poco a poco [...]. Aplaudieron, hicieron mesadas todo para la asunción pero después en el ejercicio, eran un desastre. [...] Al congreso no han tenido una buena participación porque el objetivo de ellos era legalizar la coca, vinieron con esa carta. Después ya vieron que era inviable. (Especialista en tráfico ilícito de drogas)

Líderes, líderes no hay. Los que más o menos representaban han sido usados por grandes políticos y la gente se ha dado cuenta. [...] La gente ya no confía tanto. No podría decir que haya representantes fuertes en el valle. (Dirigente cocalero del VRAE)

Aquellas, sin embargo, no han sido las únicas relaciones constituidas por el movimiento cocalero con organizaciones políticas intermediarias. Los grupos insurgentes ofrecen múltiples servicios a los agricultores cocaleros, ya que dan protección frente a la Policía Antidrogas, a la par que los protegen de los narcotraficantes.

A cambio de ello, reciben apoyo de la población para expandir operativa y políticamente su accionar armado (Felbab-Brown, 2010). Esto no ocurre de manera homogénea, pues existen particularidades regionales, sobre todo debido a la diferencia de la presencia de Sendero Luminoso en las dos principales zonas cocaleras (CVR, 2003): si bien en el Alto Huallaga el dinero de las actividades ilícitas se utilizó para financiar a las columnas senderistas, en el VRAE, el dinero generado con la venta de la hoja de coca sirvió para cubrir los recursos que dejaron de generar los campesinos que pasaron de trabajar la tierra a combatir a tiempo completo a este grupo (Tapia, 1995)³.

Así, por un lado, a fines de la primera e inicios de la segunda década del siglo XIX, Sendero Luminoso del Alto Huallaga, comandado por el camarada «Artemio» (capturado a inicios de 2012) era uno de los grupos más importantes. El discurso de esta facción no era de continuidad de la lucha armada, sino que se plegaban a la «línea acuerdista» planteada por Abimael Guzmán luego de su captura. Sin embargo, seguían operando como intermediarios entre la comunidad y el narcotráfico, tratando de controlar las organizaciones sociales y políticas del valle y desplegando acciones contra la erradicación. Por otro lado se situaba el autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP-VRAE), quienes manifestaban su total desvinculación con el mando y la «línea acuerdista» de Guzmán. La crítica que se construye hacia él está basada en la búsqueda de un acuerdo de paz y una solución política. Este hecho es elemento clave para la asignación del calificativo de «revisionista» a Guzmán, y el que da pie para construir este distanciamiento con la vertiente genética de Sendero Luminoso. A la par, progresivamente han ido construyendo argumentos para solidificar su acercamiento hacia la población, hacia las comunidades contra las cuales alguna vez atentaron. Para ello, el MPCP-VRAE ha desplegado una sostenida campaña de recuperación de la confianza de la población.

En resumen, más allá de las motivaciones específicas, las razones estructurales y las explicaciones de contexto, es una evidencia de que en la práctica las organizaciones gremiales, los partidos políticos y los grupos insurgentes han jugado un rol importante para el movimiento cocalero, como actores relevantes en la defensa política de sus intereses. Sin embargo, en ese ejercicio han mostrado particularidades que se manifiestan tanto en sus discursos como en sus estrategias de acción.

³ Las pretensiones iniciales de Sendero Luminoso se vieron frustradas con la caída de Abimael Guzmán en 1992 y posteriormente con la del camarada «Feliciano» en 1999. Luego de ello siguieron adelante dos facciones que, en términos prácticos, deben ser analizadas como dos organizaciones totalmente distintas tanto en su organización, proyección e incluso en su discurso. Así, para fines analíticos, en lo sucesivo se denominará Sendero Luminoso o SL-AH a la organización del Alto Huallaga. Para la organización insurgente ubicada en el VRAE, se utilizará la denominación Militarizado Partido Comunista del Perú o MPCP-VRAE.

3. El discurso de las organizaciones intermediarias frente al control de cultivos

Los gremios cocaleros han desarrollado con cierta claridad las demandas del movimiento social al que se articulan, aun cuando presentan algunas particularidades relacionadas al escenario local al que pertenecen⁴. Los intentos por integrar una agenda nacional han llevado a identificar al menos cuatro ejes. Haciendo una revisión a las demandas planteadas en las acciones de protesta y conflictos protagonizados por los gremios cocaleros entre 2007 y 2010, en el primer plano, se encuentran las demandas relativas al estatus de la hoja de coca. En estas, el movimiento demanda el reconocimiento de la hoja como patrimonio nacional, suspendiendo la efectividad de las leyes relativas a su proscripción, en especial la ley 22095. Junto a ello, se reclama la protección y promoción del cultivo, ya en la línea de suspender la erradicación forzosa, empadronar a los agricultores cocaleros y mejorar los pagos de ENACO.

En tercer lugar, se exige que el Estado fiscalice a tres instancias importantes, relativas al control de cultivos y la lucha contra las drogas. Por un lado, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ente rector de la política antidrogas en el Perú y que juega un papel clave en la promoción del control de cultivos, especialmente desde el desarrollo alternativo. Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en los valles, también dedicados principalmente a acciones relativas al desarrollo alternativo. Finalmente, ya de manera concreta sobre el aspecto, se demanda fiscalizar los programas y proyectos de desarrollo alternativo, buscando sancionar a quienes no hayan logrado los impactos planificados. En cuarto lugar, las demandas de los gremios cocaleros también han integrado mejoras para el desarrollo local: se ha reclamado la promoción de la diversificación de cultivos y la mejora de los circuitos comerciales. Asimismo, se exige que el Estado realice mayor y mejor inversión pública en las zonas cocaleras.

⁴ Mientras que en el Alto Huallaga los reclamos son bastante más amplios y pragmáticos, en el VRAE y en La Convención, las demandas tienen un fuerte componente étnico. Así, mientras los primeros demandan mejores condiciones de vida y mayor presencia del Estado, los segundos suman a su demanda la tutela de la hoja de coca por ser una planta sagrada.

Tabla 1. Ejes y propuestas de los gremios cocaleros

Ejes	Propuestas
Estatus de la hoja de coca	Declarar la hoja de coca como patrimonio nacional, protegiendo su cultivo. Suspender la efectividad de la ley 22095, de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, base legal de la proscripción de cultivos.
Protección y promoción del cultivo	Suspender la erradicación forzosa. Realizar un nuevo empadronamiento de ENACO a fin de admitir a nuevos agricultores. Mejorar los precios de compra que ofrece ENACO por la hoja de coca.
Fiscalización de las intervenciones institucionales	Desactivar DEVIDA, por tratarse de una organización ineficiente. Retirar a los organismos no gubernamentales que operaban en los valles.
Desarrollo integral en paralelo a la actividad cocalera	Promover la diversificación de cultivos. Mejorar los servicios públicos en las zonas cocaleras.

Fuente: Reporte de monitores en conflicto, Defensoría del Pueblo a diciembre 2012. Elaboración propia.

Llama la atención el tratamiento que recibe el desarrollo alternativo: por un lado, el fuerte énfasis al rechazo institucional de las organizaciones sociales y estatales dedicadas al control de cultivos en la zona, en especial de DEVIDA y de las ONG. Sin embargo, el principal enfoque de ambas es la promoción de la diversificación de cultivos, así como las mejoras en términos de inversión pública en la zona, siendo estos dos aspectos que son demandados en el mismo pliego de reclamos. En esa línea, se puede interpretar que no se rechaza la estrategia, sino la implementación de la misma.

Por su parte, si se revisan los planes de gobierno de los partidos y movimientos políticos ganadores de los dos últimos procesos electorales regionales y locales, se puede encontrar dos tendencias en el tratamiento de las estrategias de control de cultivos, ya sea para establecer críticas o para proponer alternativas respecto a la hoja de coca⁵. En estos casos, existe un tratamiento diferenciado de acuerdo al plano en el que se manifiesta cada propuesta o crítica. Entre los primeros elementos importantes destacan el que la erradicación tenga tan poca presencia en los planes de gobierno a nivel distrital. Asimismo, que el desarrollo alternativo aparezca tanto en el plano crítico como en el propositivo.

⁵ Para el análisis se ha revisado y codificado el tratamiento hecho a las estrategias de control de cultivos en los planes de gobierno de los partidos ganadores de las elecciones distritales (58), provinciales (18) y regionales (8) de las zonas cocaleras de Ayacucho, Cusco, Huánuco y San Martín para 2006 y 2011.

En el plano crítico, las ideas respecto al control de cultivos se plantean de manera general como la defensa de la hoja de coca ante, por ejemplo, «...la ausencia de una propuesta seria, sustentable y sostenible de desarrollo agropecuario...»⁶. Cuando se entra en detalle sobre las estrategias, se señala que: i) la compra monopólica de ENACO afecta negativamente la agricultura. Este hecho es resaltado especialmente en los distritos de La Convención⁷; ii) la erradicación es una amenaza que representa la intromisión extranjera en la política nacional, implementada por agentes de política internacional. Este discurso aparece incluso en zonas donde no opera la erradicación⁸; iii) el desarrollo alternativo requiere ser monitoreado de manera cercana a fin de que cumpla con sus objetivos. En este caso, no se plantea una crítica tan cerrada sino más bien el interés por tener acceso al control de la gestión de estos proyectos⁹.

En el plano propositivo, los planteamientos de corte económico y político predominan en la agenda electoral. Sin embargo, resulta interesante que junto a la industrialización y a la legalización del cultivo, se encuentre también la promoción de proyectos de desarrollo alternativo. Si se mira en contraste con la lectura propuesta desde el plano crítico, no se manifiesta oposición a esta estrategia, sino que se proponen mejoras para la misma. Así, las propuestas plantean: i) la industrialización de la hoja de coca, aspecto para el cual se propone incluso un porcentaje del presupuesto municipal, a fin de generar una empresa local que permita la comercialización del referido producto¹⁰; ii) la legalización de la hoja de coca, promoviendo su defensa legal, asunto para el cual también se dispone de presupuesto en los planes de gobierno¹¹; iii) el fomento de los cultivos alternativos, mediante la instalación de infraestructura adecuada para su cultivo, así como su industrialización a fin de generar nuevos mercados laborales¹².

Si se evalúan tanto las críticas como las propuestas electorales, llama la atención que la única que se vincula estrechamente con todos los intereses es el *desarrollo*

⁶ Ver: Plan de gobierno del Movimiento Regional Frente Amplio. Elecciones 2006 en el distrito de José Crespo y Castillo, Huánuco.

⁷ Ver: Planes de gobierno del Partido Nacionalista del Perú para las elecciones distritales de 2006 en Ocobamba o de la Alianza Nacionalista para las elecciones distritales de 2010 en Huayopata.

⁸ Al respecto, revisar los planes de gobierno de Unión por el Perú para las elecciones distritales de 2006 en Pichari o de Somos Perú en el mismo proceso para el distrito de Vilcabamba, ambos en el Cusco. En ambas zonas no se implementan operativos de erradicación.

⁹ Ver: Plan de gobierno de Despertar Nacional para las elecciones provinciales de 2010 en Tocache.

¹⁰ Ver: Plan de gobierno de Unión por el Perú para las elecciones 2006 en el distrito de Echarate.

¹¹ Ver: Planes de gobierno de Qatun Tarpuy para la elección distrital de 2006 en el distrito de Sivia, así como de 2006 y 2010 de los partidos ganadores en el distrito del Mozón para las elecciones distritales.

¹² Sobre el tema, se recomienda revisar los planes de gobierno de Somos Perú para las elecciones distritales de Vilcabamba de 2006, así como el Plan de gobierno de Nueva Amazonía, para las elecciones regionales de 2006 en San Martín.

alternativo. En esa línea, no solo ocurre que esta estrategia de control de cultivos es la única presente en el plano de las propuestas y que sus críticas no están centradas en su desaparición, sino en su mejora (el desarrollo alternativo es la estrategia que genera menos resistencias, al punto de ser integrado como demanda de las organizaciones partidarias). Además, incluyendo las propuestas de industrialización y de legalización de hoja de coca, es la única que expresamente es vinculada a la generación de mercados y de mano de obra, diferenciándose naturalmente por tratarse de cultivos distintos.

Por otro lado, las organizaciones derivadas del Sendero Luminoso histórico han asumido explícitamente la defensa política del cultivo de la hoja de coca. Sin embargo, sus discursos han presentado matices en las dos zonas donde tiene presencia esta organización. En declaraciones, el capturado camarada «Artemio», si bien no se muestra en contra de los cultivos de hoja de coca ni demanda el fin de «la erradicación violenta y forzosa» (Comité Regional Metropolitano – Partido Comunista del Perú, 2010), sí expresa una disposición positiva hacia los cultivos alternativos, sin dejar de criticar la implementación de estos programas.

Tercero, posición de ‘Artemio’ sobre la coca.- Aquí es donde se encontrará las mayores sorpresas. ‘Artemio’ expresa su discrepancia con los dirigentes de las dos organizaciones cocaleras en el Alto Huallaga, a quienes considera ‘sectarios’ por concentrarse solo en la coca. Y, aunque critica al PDA (Programa de Desarrollo Alternativo), ‘Artemio’ no plantea una defensa cerrada de la coca sino, por lo contrario, se concentra en cultivos alternativos (cacao, café, piña, sacha inchi) y en ganadería. Además expresa la necesidad de evitar deforestación y de reforestar. En lugar de hablar sobre política cocalera, habla sobre una «política agraria». En los hechos, suena como un predicador de la sustitución de cultivos y su discurso deja a la coca en un lugar secundario. (IDL-Reporteros, 2010)

Por su parte, el MPCP-VRAE plantea algo distinto a Artemio. Así, buena parte de la defensa de los intereses cocaleros se concentra en diferenciar la actividad cocalera del narcotráfico, argumentando que los agricultores, víctimas de la erradicación, son productores agrícolas y el Estado «debe felicitarlos, por tener la capacidad de generarse ellos mismos un trabajo» (Comité Regional Metropolitano-Partido Comunista del Perú, CC-PCP, 2009). Del mismo modo, en línea con su distanciamiento con la organización del Alto Huallaga así como con la posición originaria de Guzmán, critica su posición respecto a la erradicación forzosa y al desarrollo alternativo, demostrando desconfianza frente a las estrategias estatales:

¿Qué esperan del narco Estado? ¿Desarrollo, cultivo alternativo, generación de puestos de trabajo? Es naturaleza de todo narco Estado el monopolio de la fuerza reaccionaria para proteger los intereses de sus financistas; bancos y grupos financieros dedicados al blanqueo de dinero del narcotráfico, la DEA y DINANDRO

son sus brazos armados, DEVIDA y CORAH son sus carnes de cañón. El campesino cocalero sabe que este Estado jamás llenará sus estómagos con alimentos, más que con balas. De allí la necesidad de la organización popular, la incorporación a la guerra popular democrática, para barrer a las fuerzas armadas reaccionarias que aseguran la erradicación de nuestra fuente de sustento diario. (CC-PCP, 2009)

Ellos dicen así genéricamente, la defensa de la coca y del campesinado. Ellos más defiende, ellos dicen «anteriormente que te dio Guzmán o Feliciano. Te organizaba, te decía que no permitas el ingreso de los militares. Pero cuando vienen ellos se retiraban. Nosotros no, vamos estar acá». Entonces cuando viene un operativo ellos lo emboscan, por lo tanto el operativo aborta. Son mucho más prácticos. (Especialista en tráfico ilícito de drogas)

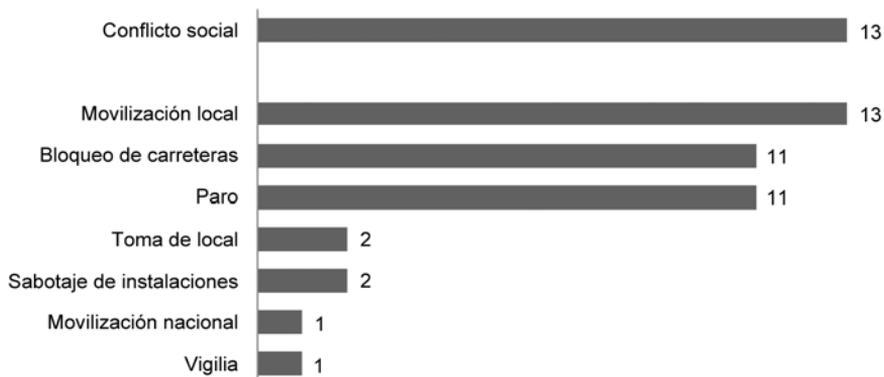
Ambas organizaciones plantean posturas incluso contradictorias respecto al control de cultivos. En el Alto Huallaga, el cultivo alternativo llegó a ser aceptado por SL dadas las presiones de los agricultores. En contraste, en el VRAE, la postura de los senderistas es de desconfianza.

4. El accionar de las organizaciones intermediarias y la defensa del cultivo

Las organizaciones gremiales han logrado la movilización del apoyo en contra del control de cultivos mediante acciones de protesta pública. Este tipo de acciones deben entenderse como una modalidad mediante la cual se busca mostrar oposición frente a ciertas políticas, cuyo objetivo es lograr una respuesta favorable del Estado o del sistema económico (Lipsky, 1968, p. 1145). De acuerdo al monitoreo de conflictos que realiza la Defensoría del Pueblo, entre 2007 y 2011, las acciones de protesta realizadas con mayor frecuencia han sido las movilizaciones locales, seguidas de los bloqueos de carreteras y los paros regionales (aunque también hubo acciones más radicales, como tomas de local, sabotaje a instalaciones públicas o privadas).

La movilización nacional realizada en octubre de 2007 luego del incumplimiento del Acta de Tocache, en la que (de acuerdo a los gremios cocaleros) el Estado se comprometía a suspender la erradicación, ha sido el único episodio nacional registrado en este lapso. Sin embargo, contrasta con la marcha nacional que la misma organización (CONPACCP) logró realizar en 2003, que consistió en una marcha de sacrificio desde el Alto Huallaga hacia Lima, y que le valió a la organización ser reconocida como «interlocutor válido» en el debate público sobre el recrudescimiento de las acciones de erradicación en el Huallaga (Castillo y Durand, 2008, p. 51). Estas acciones de protesta han implicado trece conflictos sociales registrados, situaciones en las que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, existe una tensión sostenida entre el grupo movilizado y el Estado.

Gráfico 1. Conflictos sociales y acciones de conflicto reportados que involucran a gremios cocaleros (2007-2012)



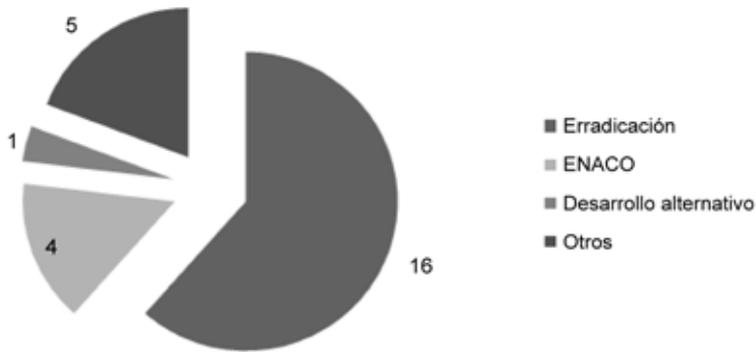
Fuente: Monitoreo de conflictos. Defensoría del Pueblo. Elaboración propia.

Las estrategias de control de cultivos han tenido presencia diferenciada en estas acciones. La erradicación ha sido la estrategia que más rechazo ha despertado, estando presente en dieciséis de las veintiséis situaciones registradas por la Defensoría del Pueblo. El sistema de licencias y de comercialización que protagoniza ENACO también ha tenido presencia, solo que en menor medida y concentrada principalmente en el valle de La Convención, donde los agricultores consideran que el pago que la empresa nacional hace por arroba de hoja de coca está por debajo de lo que el mercado ofrece, aun cuando su destino sea el tráfico ilícito de drogas o el contrabando¹³. El desarrollo alternativo tampoco ha estado libre de las demandas de los gremios, quienes generalmente concentran su atención en el mal manejo de estos proyectos o en su poca efectividad.

El único caso reportado refiere a Sandía en Puno, donde la Federación Provincial de Campesinos logró paralizar y expulsar un proyecto de cultivos alternativos para la sustitución de la hoja de coca por cacao, café y madera. Entre los argumentos esgrimidos para este rechazo, se señalaba que los proyectos nunca logran los resultados ofrecidos. Las tres estrategias de control de cultivos están presentes en mayor o menor medida en las demandas con las que las organizaciones gremiales canalizan los intereses del movimiento cocalero. En ellas, la erradicación es sin duda la que genera mayores movilizaciones.

¹³ Respecto a los conflictos con ENACO, revisar la información provista por la Defensoría del Pueblo sobre los paros cocaleros en La Convención, Kosñipata, Lares y Yanatile en los Reportes de Conflictos 50 y 70.

Gráfico 2. Demandas relacionadas a las estrategias de control de cultivos en conflictos sociales y acciones de protesta de gremios cocaleros (2007-2012)



Fuente: Monitoreo de conflictos, Defensoría del Pueblo. Elaboración propia.

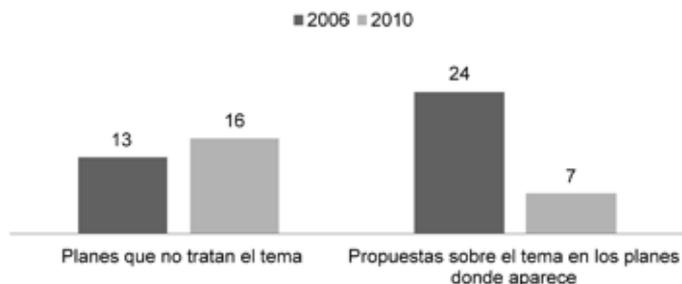
Por su parte, el accionar de los partidos políticos se configura casi exclusivamente en los procesos electorales. Por eso es difícil estudiar su accionar respecto a la ejecución continuada de estrategias de control de cultivos. En el escenario electoral, la relación entre el partido político y el movimiento es funcional y coyuntural, sin importar que la alianza suponga coincidencias en cuestiones de fondo ni la articulación real de una agenda común (Bebbington et al., 2008). Si bien los candidatos en los planos nacional, regional y local tienen propuestas vinculadas con los intereses cocaleros, no corresponden a posturas ideológicas consensuadas. Ello ocurre porque los partidos políticos operan como «franquicias» a nivel local en esos procesos electorales. Para los candidatos interesados en un espacio a nivel parlamentario, la alianza con un partido nacional consiste básicamente en conducir la campaña en la localidad (lo que implica generar apoyo y movilizar recursos), a cambio de ser parte de la lista parlamentaria.

Para los candidatos a un espacio regional o local ocurre algo semejante, pues debido a la necesidad que tienen los partidos de mantener su inscripción vigente, requieren candidatos locales que puedan asegurarles suficientes votos, aun cuando la postura ideológica llegue a ser contradictoria (o al menos no esté alineada con sus elementos discursivos formales). En todo caso, siempre queda la opción de inscribir un movimiento local independiente, o generar una alianza temporal a fin de contar con la formalidad para participar en elecciones. Importa entender que esto tiene impacto también en la construcción del discurso electoral. Como lo importante es ganar el apoyo en la localidad, es menos relevante i) si las propuestas locales están ideológicamente articuladas con lo que plantea el partido a nivel nacional o ii) si el espacio local al que se postula tiene reales competencias para atender el asunto propuesto.

La relación coyuntural lleva a que durante la campaña las relaciones y acciones sean sobre todo discursivas. Cuando se trata de un alcalde electo, la única estrategia de control de cultivos que está dentro de su posible campo de acción es la del desarrollo alternativo, puesto que la erradicación es controlada totalmente por el gobierno central y la gestión monopólica del cultivo lícito se efectúa desde una empresa también de alcance nacional. En cambio, los programas de desarrollo alternativo, fuera que los implemente la cooperación, una ONG o el propio Estado, requieren coordinaciones con las autoridades locales. Este aspecto, sumado a la posibilidad de acceso a recursos que puedan potenciar los logros de su gestión, conlleva que, cuando candidatos, prioricen estos temas y que, al ser electos, busquen ejecutar acciones sobre el desarrollo alternativo. Sin embargo, estas están mayormente referidas a lograr su implementación, siempre que los logros redunden en su protagonismo político.

Aun con eso, lo coyuntural ha pesado mucho al momento de integrar propuestas prococleras en las agendas electorales. El principal problema que han tenido los dirigentes cocleros que en 2006 se integraron a plataformas electorales fue su escasa capacidad para cumplir con sus «promesas», especialmente respecto a la protección del cultivo. Eso se ha reflejado en la importancia que se le ha dado al tratamiento del tema en los planes de gobierno de los veintinueve ganadores de los distritos de las cuatro regiones que conforman las dos cuencas cocleras más importantes: se refleja un importante retroceso en el tratamiento del tema. Si en 2006 trece ganadores no tocaron el tema «hoja de coca» en sus planes de gobierno, en 2010 esta cifra aumentó a dieciséis. Más significativo aún resulta encontrar que, entre ambas elecciones, el número de propuestas ha pasado de veinticuatro a siete y se ha reducido a casi la cuarta parte. En gran medida, ello responde a que los candidatos consideraron poco estratégico tratar el tema, a fin de lograr éxito en la contienda electoral.

Gráfico 3. Frecuencia de propuestas y críticas sobre hoja de coca y control de cultivos en planes de gobierno de candidatos electos a nivel distrital en zonas cocleras en procesos de 2006 y de 2010*

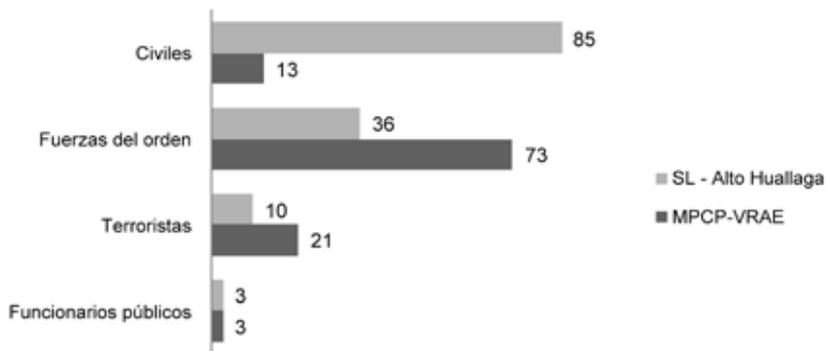


Fuente: Infogob. Elaboración propia.

*Distritos con presencia de cultivos de hoja de coca de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huánuco y San Martín.

Por otro lado, el cambio de discurso del MPCP-VRAE, así como la diferencia de su accionar con respecto al SL-AH, se hace evidente en el tipo de víctimas que han tenido sus incursiones en los últimos años. Mientras que SL-AH ha cobrado 85 víctimas civiles entre 2000 y 2010, el MPCP-VRAE ha cobrado 13. En contraste, la facción del VRAE ha concentrado sus esfuerzos en las fuerzas del orden, de manera que sus acciones han tenido como resultado 63 muertes entre oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, la Policía y los ronderos. En el Alto Huallaga, esa cifra ha sido la mitad. En el VRAE, debido a los sostenidos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo insurgente, se han reportado más víctimas de Sendero en ese lapso de tiempo, siendo poco más del doble que en el Alto Huallaga. Con estos resultados, puede argumentarse que la principal diferencia entre el VRAE y el Alto Huallaga es el foco del enfrentamiento que tiene cada facción.

Gráfico 4. Víctimas de las facciones de Sendero Luminoso según tipo (2000 - 2010)



Fuente: Anuarios estadísticos PNP. Elaboración propia.

* Se incluye a los ronderos entre las fuerzas del orden.

Para Sendero Luminoso en el Alto Huallaga la erradicación es el principal foco de los ataques. En los últimos cinco años, los operativos de erradicación han sido atacados sostenidamente en la zona del Alto Huallaga, con diverso el tipo de acciones implementadas y un total de 46 heridos hasta 2011.

Asimismo, es interesante que el MPCP-VRAE ha logrado construir una cierta legitimidad en una zona donde son escasas las estrategias de control de cultivos. Si bien ENACO tiene empadronados a casi cinco mil productores en la zona ayacuchana del valle, no se han reportado conflictos en los que haya mediado la intervención de la organización insurgente. Asimismo, como en este territorio no se erradica, no se hace necesario desplegar acciones armadas de protección semejantes a las implementadas en el Alto Huallaga. Finalmente, a pesar del manifiesto rechazo y

desconfianza por el desarrollo alternativo ya que, siguiendo con su postura confrontacional, rechaza de plano toda opción que venga desde el Estado, durante la vigencia de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011, no se han reportado acciones de amedrentamiento de los hermanos Quispe Palomino en contra de los cultivos de café o cacao.

En términos generales, el discurso de Sendero Luminoso tanto en el VRAE como en el Alto Huallaga es menos explícito discursivamente sobre el control de cultivos que respecto a otras organizaciones intermediarias. Sin embargo, sus acciones armadas son bastante claras. Como ha ocurrido con las otras organizaciones, la erradicación ha sido la que despertó más acciones violentas, pero tiene lugar solo en dos zonas cocaleras, una de las cuales tenía hasta hace poco tiempo una fuerte presencia de este grupo armado. Nuevamente, resulta relevante que el desarrollo alternativo, aun cuando provenga de fuentes de cooperación externa, sea la estrategia que genera menos resistencias.

5. Consideraciones finales: lecturas sobre las tensiones entre las formas de intermediación del movimiento cocalero

Las *organizaciones gremiales*, los *partidos políticos* y los *grupos insurgentes* han jugado un rol importante para el movimiento cocalero, y han sido actores relevantes en la defensa política de sus intereses. Sin embargo, cada uno de esos actores implica escenarios de premisas, demandas y estrategias diferentes (e incluso contradictorias entre sí).

El *gremio cocalero* ha nacido con el movimiento y tiene presencia desde sus primeras acciones de resistencia al control de cultivos. Sus objetivos principales han sido claros: presionar al gobierno para que deponga su postura frente a la hoja de coca. En ese trayecto, el gremio ha mostrado varias dificultades relacionadas sustancialmente a sus diferencias e intereses regionales. Mientras en el valle de La Convención el foco del reclamo está en el precio pagado por ENACO, en el Alto Huallaga se trata de la resistencia a los operativos del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos en el Alto Huallaga - CORAH (aunque debe quedar claro que, en estos casos, no se rechaza la institucionalidad estatal, sino que se cuestiona la manera en la que se dispone hacia los cultivos).

La vocación del movimiento cocalero por reconocer (al menos de manera instrumental) la vigencia de la institucionalidad, se ve reforzada en su relación intermitente con *los partidos políticos* y *las plataformas electorales*. Partiendo de la premisa de que integrar un partido político puede darle al movimiento cocalero mayor accesibilidad a la toma de decisiones del Estado, líderes locales y nacionales han optado por ser candidatos para diversos cargos. Más allá de los intereses y

aspiraciones personales de los dirigentes, o de las reales competencias que tienen los gobiernos locales para influir en el control de cultivos, lo relevante es que la integración a una organización partidaria implica el reconocimiento de la «importancia» de la vía democrática-procedimental.

En contraste, resulta relevante que el movimiento también recurra a la intermediación de una organización política cuya principal vocación es la destrucción-transformación de esa institucionalidad: la relación de intermediación ocasional del movimiento cocalero con organizaciones insurgentes llama la atención sobre su interés por mantenerse dentro del plano institucional y legal. Así, las organizaciones insurgentes personificadas en un primer momento por SL-AH y en tiempos más recientes por los remanentes de esta organización y del MPCP-VRAE, han servido como resistencia armada, en algunos casos simbólica y en otros efectiva, para reducir la efectividad del control de cultivos, especialmente de la erradicación. Así, aun con el ejercicio de la presión pública mediante paros y huelgas protagonizadas por los gremios, el movimiento cocalero se encuentra en el ejercicio de un derecho reconocido por el marco normativo nacional, pero las acciones armadas desplegadas por Sendero Luminoso están fuera de ese escenario.

¿Cuál es el asunto relevante aquí? Pues la amplia gama de demandas diferenciadas y los rostros contradictorios de varios de los actores que se relacionan e intermedian el movimiento.

En el plano discursivo, se hacen evidentes las diferentes arenas y rostros en los que se encarna el movimiento cocalero según el tipo de organización por la cual es intermediada. A la par de que se podía exigir más presencia del Estado desde los gremios y los partidos, se rechazaba su presencia desde las organizaciones insurgentes. Por otro lado, en el caso de las acciones desplegadas por las organizaciones intermediarias para defender el cultivo ocurre algo semejante: al mismo tiempo que con los gremios se busca presionar al Estado y que desde los partidos políticos se quiere formar gobierno para conducir al mismo con una perspectiva favorable al cultivo de hoja de coca, desde las organizaciones insurgentes se busca reducir la capacidad de acción del Estado.

Ello sugiere una estructura fragmentaria y heterogénea, así como compartimentos sin un centro de articulación estable. Al estar compuesta y *vinculada* (por lo menos discursivamente) a una serie diversa de entidades y organizaciones, cada cual puede asumir un mismo objetivo desde diferentes aristas que, incluso, pueden parecer contradictorias.

¿Cuál es la racionalidad del movimiento cocalero? Pues parece que, en tal sentido, resulta complejo pensar al movimiento desde una única racionalidad. Asimismo, es difícil decir que la *variedad de sus rostros y organizaciones obedece a un carácter instrumental interno*, pues la inconsistencia práctica entre las posiciones divergentes

que llegan a asumir las organizaciones que los intermedian parecen no tener un enfoque de maximización de recursos: lo que de un lado puede ser considerado un logro, para otra arista que persigue el mismo objetivo puede representar una amenaza¹⁴.

Lo relevante es que aquellas tensiones entre los fragmentos que componen el movimiento y entre las herramientas, estrategias y discursos de las arenas de intermediación parecen mostrar la convivencia de campos diferenciados y de contradicciones que, paradójicamente, no parecen competir entre sí y, por lo tanto, a pesar de las tensiones, generan campos de defensa política del cultivo de hoja de coca. La bandera «coca o muerte», izada durante los últimos años, parece reflejar la radicalidad discursiva en un escenario que tiene *un* objeto común, pero múltiples objetivos y singularidades.

Referencias bibliográficas

- Arellano, D. (1996). Política pública, racionalidad imperfecta e irracionalidad. Hacia una perspectiva diferente. *Gestión Pública*, V(2), 319-347.
- Bebbington, A., Scurrah, M. y Bielich, C. (2008). *Mapeo de movimientos sociales en el Perú actual*. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales.
- Burstein, P. y Linton, A. (2002). The Impact of Political Parties, Interest Groups, and Social Movement Organizations on Public Policy: Some Recent Evidence and Theoretical Concerns. *Social Forces*, 81, 381-408.
- Castillo, Mayarí y Durand, Anahí (2008). Movimiento cocalero, política y representación: los casos boliviano y peruano. En F. García (Ed.), *Identidades, etnicidad y racismo en América Latina* (pp. 47-72). Quito: Colección 50 años Flacso.
- Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003). *Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación*. Tomo II, capítulo 1; tomo IV, capítulo 1; tomo V, capítulo 2. Lima: CVR.
- Comité Regional Metropolitano – Partido Comunista del Perú (2009). Comunicado. Disponible en <http://pcp-crm.blogspot.com/2009/10/comunicado.html>
- Comité Regional Metropolitano – Partido Comunista del Perú (2010). A barrer la capitulación revisionista con guerra popular. Disponible en <http://pcp-crm.blogspot.com/2010/03/barrer-la-capitulacion-revisionista-con.html>

¹⁴ Por ejemplo, en los inicios del movimiento cocalero en el VRAE, el involucramiento de Sendero Luminoso con las organizaciones de agricultores llevó a que las fuerzas del orden desconfien de estos, incluyéndolos dentro de su lista de objetivos de control. En la actualidad, el accionar de dirigentes al sumarse a los partidos políticos y no lograr cumplir sus metas por estar simplemente fuera del alcance de sus competencias, merma la capacidad de las organizaciones gremiales de conducir las demandas del movimiento, ya que genera quiebres institucionales internos.

- Durand, F. (2005). El problema cocalero y el comercio informal para uso tradicional. *Debate Agrario*, 39, 109-125.
- Felbab-Brown, V. (2010). *Shooting up: Counterinsurgency and the war on drugs*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Giugni, M. y Passy, F. (1998) Social Movements and Policy Change: Direct, Mediated, or Joint Effect? American Sociological Association Section on Collective Behavior and Social Movements Working Paper Series, 1 (4). Disponible en <http://www.nd.edu/~dmyers/cbsm>
- IDL-Reporteros (2010) «Artemio»: Lo que revela el video. Disponible en <http://idl-reporteros.pe/2010/12/18/artemio-lo-que-revela-el-video/>
- Jasper, J. (2002). A strategic approach to collective action: Looking for agency in social-movement choices. *Mobilization: An International Journal*, 9(1), 1-16.
- Jenkins, C. y Perrow, C. (1977). The Insurgency of the Powerless: Farm Workers' Movements (1946-1972). *American Sociological Review*, 42, 249-268.
- Kolb, F. (2000). Social Movements and Policy Outcomes: Theory Building in a Comparative Perspective. *Working Papers Reihe «Soziale Bewegung und politischer Konflikt»*, 3/2000.
- Lipsky, M. (1968). Protest as a Political Resource. *The American Political Science Review*, 62 (4), 1144-1158.
- Lorenc, F. (2005). La sociología de los problemas públicos. Una perspectiva para el estudio de las relaciones entre la sociedad y la política. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 12 (2005.2). Publicación electrónica de la Universidad Complutense. Disponible en <http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/NOMA0505220141A>
- Medellín, P. (1997). Inestabilidad, incertidumbre y autonomía restringida: elementos para una teoría de la estructuración de políticas públicas en países de baja autonomía gubernativa. *Revista Reforma y Democracias*, 8.
- Meyer, D. (2003). How social movements matter. *Contexts*, 2(4), 30-35.
- Meyer, D. (2004). Protest and Political Opportunities. *Annual Review of Sociology*, 30, 125-145. doi: 10.1146/annurev.soc.30.012703.110545
- O'Donnell, G. y Oszlak, O. (1981). *Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación*. Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2010). *Perú. Monitoreo de cultivos 2009*. Lima.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2012a). *Perú. Monitoreo de cultivos 2011*. Lima.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2012b). *World Drug Report, 2011*. Viena.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2012c). *Perú: Desempeño de las empresas apoyadas por el desarrollo alternativo*. Lima.

- Özen, H. y Özen, S. (2010). Public Policies and Social Movements: The Influences of Protest Movements on Mining policy in Turkey. *Review of Public Administration*, 43(2), 33-64.
- Petras, J. y Veltmeyer, H. (2006). Social Movements and the State - Political Power Dynamics in Latin America. *Critical Sociology*, 32(1).
- Segura, F. (2009). ¿Puede gestionarse la complejidad de los problemas sociales? Aportaciones de la teoría de la complejidad a la formulación de políticas públicas. *Nómadas Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 23. Disponible en <http://www.ucm.es/info/nomadas/23/franciscosegura.pdf>
- Tapia, C. (1995). *La autodefensa armada del campesinado*. Lima: Cedep.
- Tilly, C. (1993). Movements as Historically Specific Clusters of Political Performances. *Berkeley Journal of Sociology*, 38, 1-30.
- Touraine, A. (1999) ¿Nuevos movimientos sociales? En *¿Cómo salir del neoliberalismo?* México: Paidós, pp. 53-80.
- Van Dun, M. (2009). *Cocaleros: Violence, Drugs and Social Mobilization in the Post-Conflict Upper Huallaga Valley, Peru*. Tesis doctoral, Universidad de Utrech.